

Que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Carlos A. Garza, contra los actos del ciudadano alcalde 4º de esta ciudad, por los que lo citó y conminó con multas.

Notifíquese, sáquense las copias de estilo, y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El ciudadano Juez de Distrito de Nuevo Leon, definitivamente juzgando, así lo decretó y firmó por ante mí, el secretario. Doy fé.—*Lic. F. Valdés Gómez.*—*Pablo Borrego*, secretario.

Es copia que certifico. Monterey, Noviembre 25 de 1874.—*Pablo Borrego*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre 19 de 1874.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juez de Distrito de Nuevo Leon, por el C. Carlos A. Garza, contra los actos del C. Rafael M. de la Garza, alcalde 4º de Monterey, que lo citó á contestar un juicio sin ser autoridad legítima para ello. Vista la sentencia del Juez de Distrito que amparó al quejoso, y las demas constancias que obran en autos. Con fundamento de lo dispuesto en la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Nuevo Leon, el 24 de Noviembre próximo pasado que amparó al quejoso. Devuélvase los autos al juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Si-*

TOMO VII.—PARTE II.

mon Guzman.—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico.—México, Diciembre 31 de 1875.—*Lic. Enrique Tarrada*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes por Nicolás Medina y Manuel Soto Torres, contra la jefatura política de la capital de ese Estado, que los juzgó y sentenció á muerte por delito de robo con usallo.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez federal de Distrito.

El jefe de hacienda que suscribe, en sustitucion del ciudadano promotor fiscal, dice:

Que como consta de los autos que estan á la vista, en el juicio de amparo que promueven los reos Manuel Soto (n) Torres, y Nicolas Medina, resultan probados perfectamente contra estos, los cargos siguientes:

El dia 31 de Julio próximo pasado, en el punto nombrado "Cerritos pelones", viniendo del rancho del Ilipazote Maximiano Lucbano y su hermana Dª Andrea, fueron asaltados por dos bandidos, cuyos instantos criminales pesaron esta vez sobre sus victimas de una manera feróz, y que ataca el respeto y la honra que debe guardarse á los demas.

Muy cierto es que la vida del hombre merece nuestra consideracion; pero en ciertos casos no puede ser ilimitada, antes bien conduce á restringirla, un hecho que lleva

en sí el sello de la barbarie y de la mas enorme perversidad.

Por algo el Código político de la república, previno en su art. 23, parte 2ª, que la última pena, si bien habia de abolirse, esto no se entendiera tratándose de delitos tales, como el execrable de traicion á la patria, el de los saltadores de camino, el del incendiario, el del parricida, el del homicida, y otros que reclaman el severo castigo á que han sido sentenciados los reos de esta causa.

En consecuencia, con este principio fundamental fué expedida la ley de 3 de Mayo de 1873, que estando en vigor, se ha aplicado á aquellos por la autoridad política de esta capital.

Abierto el proceso respectivo ante dicha autoridad, se presentó á ella Maximiano Lúcbano, quejándose de la violencia ejercida en su hija Andrea, y del robo con asalto que al mismo tiempo tuvo lugar en la persona de Maximiano Lúcbano y de otros individuos que se citan en el curso de este juicio. Dadas las señales convenientes, fueron aprehendidos los autores del delito de que se trata. Se les tomaron en forma sus declaraciones, de las que en manera alguna aparecen inculpables, porque tratando de probar la coartada, citaron á testigos que por lo que toca á Torres (á) Soto, negaron rotundamente que se hallaba él aquí el día de la comision del delito, y tan falsa fué la cita da Torres respecto de uno de esos testigos, que en el careo le contesto, que *no los buenos días le habia mercedo nunca*.

Por lo que sobre iguales declaraciones corresponde al reo Nicolás Medina, los testigos á quienes citó tampoco estuvieron de acuerdo en la cita de la fecha memorable de 31 de Julio próximo pasado, por lo que hubo razon fundada y legal, para que siguiera sus pasos la Jefatura política en el sendero trasado, con arreglo á ley de 3 de Mayo de 1873.

Reconocidas las prendas, materia del robo que verificaron Torres y su socio, se ha visto que quedó justificada por los dueños,

la propiedad y preexistencia de las mismas prendas; pero como en su sentencia lo declara el ciudadano gefe político, aun cuando no estuviera plenamente probada la aparicion de los objetos robados en manos de los asaltantes, la ley de 3 de Mayo de 1873, sujeta á sus efectos á los que en caminos ó parajes despoblados, asaltan á los individuos con violencia, y con el fin de robarlos, herirlos ó matarlos.

Consta que en este punto, los acusados no pudieron desvanecer en lo mas mínimo el cargo que se les hizo; luego su culpabilidad es ineludible, y la justicia federal tiene que cerrar sus puertas al amparo que inmotivadamente solicitan.

Con la mayor evidencia se desprende á la simple lectura de estas constancias, que la autoridad ejecutora del acto que se reclama, ha obrado en la órbita de sus facultades, al imponer la última pena á los reos Torres ó Soto y Medina, pues ni alegarse siquiera es dable en contra de la propia autoridad, que dejase sin defensa á los asaltantes, ó que los trámites de la causa, no se sustanciaren con arreglo á derecho.

Basta para sincerarse de que no se faltó á uno ú otro registro, examinar las declaraciones de los deponentes, contra las que como circunstancia agravante hay que observar que hubo violencia en el robo, y que este se ejecutó por los asaltantes, no solo contra los hermanos Lúcbano, sino tambien contra otras personas que robadas igualmente por Torres y Medina, en el mismo paraje de sus crueles escenas, reconocieron á estos despues y han estado conformes y contestes en las declaraciones, de que Torres y Medina son los autores del delito de robo con asalto perpetrado, principalmente en la persona de Maximiano Lúcbano y su hermana Andrea, el dia 31 de Julio del presente año.

Tales son los hechos que condenan irremisiblemente á los responsables Soto y Medina, á sufrir la pena que se les ha impuesto, y solo una gracia especial ha podido

intentarse conforme á la ley; más como ni aun ésta se les concediera por el II. Cuerpo ante el que se interpuso el indulto, veamos ahora si procede y en qué se funda la petición que se formuló por dichos responsables.

Atenta esa petición, tuvo vd. á bien, ciudadano Juez, disponer se suspendiese el acto que iba á ejecutarse, fundando su resolución en el art. 5º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, por originarse gravámen irreparable á los solicitantes; mas no sin advertir á éstos el deber en que estaban, de espresar, conforme al art. 4º de dicha ley, la infracción de garantías sobre que deseansara la queja.

La autoridad del Estado, con el respeto que le merece la ley, desde luego obsequió aquella resolución, manifestando que oportunamente rendiría su informe, como lo ha hecho, acompañándolo de los justificantes que acreditan la justicia de sus procedimientos sobre el particular.

En tanto, no se ha designado aun por los quejosos, cual sea la garantía que consideran violada en su persona.

El reo Nicolás Medina expuso inequívocamente, que se le había juzgado por indicios de robo, acerto del todo falso, pues como se ha visto ya, algunos de los objetos robados por aquel, aparecieron en poder de su socio Manuel Soto (á) Torres, y además; personalmente le reconoció la joven Lúebano, por las prendas que el mismo Medina traía en el cuerpo, al ejecutar el robo. De esta suerte, nada es de objetarse en contra del proceso, pues como consta de él, dos de los testigos (Narciso Salas y Aniceto Ibarra) reconocieron al autor principal del delito, y á su compañero, de quien quedó averiguada su culpabilidad, por cuerda separada.

El escrito de la esposa de Soto ó Torres, adolece también de la falta de explicaciones necesarias, para recurrir al amparo, pues aunque al pie de este escrito, en el otro sí, se proclama la igualdad ante la ley, y se

citan como violadas las garantías que otorgan los art. 14, 16 y 20 de la Constitución; no encuentra el que suscribe, en que se apoye esa supuesta violación.

El art. 14, dice:

“No se podrá expedir ninguna ley retroactiva.

¿De que ley se trata? ¿A cual se quiere suponer la retroactividad?.....

La segunda parte de su artículo, dice:

“Nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho, y exactamente aplicadas á él, por el tribunal que previamente haya establecido la ley.”

Es así que la de 3 de Mayo de 1873, ha sido exactamente aplicada á los reos Torres y Medina, por la plena prueba del hecho del robo con asalto que cometieron el día 31 de Julio último, en la persona de Maximiano, Andrea Lúebano y otros; luego entónces, ¿en que estriba ó consiste la violación del art. 14 espresado?

La cita del art. 16, es por demás infructuosa, porque cometida á las autoridades la facultad de juzgar á los reos de asalto, apreheniéndolos ellas, son competentes para dictar órdenes, ó imponer la pena que conduzca al cumplimiento de la ley de 3 de Mayo de 1873, siempre que sea aplicable, como lo es en este caso, á los salteadores Soto y Medina.

En cuanto á la última cita, que es la del art. 20 de la Constitución, si las anteriores citas no son dignas de atención, mucho menos hace fuerza, el que en el art. 20 se estipulen las garantías que deben otorgarse, á los acusados en todo juicio criminal.

Ocúrrase á la lectura del art. 1º de la ley de 3 de Mayo, prorogada por el soberano Congreso el 10 de Abril último, se obtendrá por toda respuesta, que están suspensas esas garantías de que habla el art. 20, para los salteadores y plagiarios, y que en consecuencia, no cabe en las prescripciones de la ley de 20 de Enero de 1869, el recur-

so de amparo que se impetra de la justicia federal.

Por estas consideraciones, mi parecer es, salvo el ilustrado juicio de vd., que no debe decretarse el amparo que solicitan los reos Manuel Soto (á) Torres y Nicolas Medina.

Aguascalientes, Octubre 14 de 1874.—
(Firmado) *I. Ocadiz*.

Es copia de su original que certifico.
Aguascalientes, Octubre 14 de 1874.—*D. Ortigosa*.

Otro pedimento fiscal.

Ciudadano Juez federal de Distrito.

El Jefe de Hacienda que suscribe, en ejercicio de la promotoría fiscal, dice: que no habiéndose presentado en el juicio de Nicolas Medina y Manuel Soto, prueba alguna que justifique la violacion de garantías de que se quejan, segun consta del expediente que se ha tenido á la vista; nada tengo que añadir al pedimento respectivo que rendí ante el juzgado del digno cargo de vd., con fecha 14 del actual, cuyo pedimento reproduzco en todas sus partes.

Aguascalientes, Octubre 26 de 1874.—
I. Ocadiz.

Es copia que certifico. Aguascalientes,
Octubre 26 de 1874.—*D. Ortigosa*.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Aguascalientes, 29 de Octubre de 1874.
—Visto el juicio de amparo promovido sucesivamente el día 6 del actual, por Nicolas Medina y Manuel Soto, representados por su madre M^a Refugio Torres, contra el ciudadano jefe político de esa capital, por haberlos sentenciado á muerte como autores del robo con asalto, verificado el día 31 de Julio último, en el camino público, y punto llamado Cerritos pelones, situado en jurisdiccion de Ojocaliente de Bastillas del Estado de Zacatecas, y juzgádoslos como autoridad aprehensora, con arreglo á la ley de

10 de Abril del presente año que prorogó la de 2 de Mayo del pasado, con cuyos procedimientos estiman violadas sus garantías individuales, por no estar probado plenamente que sean los autores del delito que se les atribuye, segun dice el primero, y proclamando el segundo en su favor el principio de igualdad ante la ley, y los arts. 14, 16 y 20 de la Constitucion general.

Vistos los decretos de suspension inmediata que se dictaron en consideracion á la urgencia apremiante del caso, por estar ya en capilla los quejosos que debian ejecutarse á las ocho de la mañana del siguiente día: el informe justificado con los mismos procesos originales que remitió el ciudadano gobernador del Estado como autoridad inmediatamente ejecutora del acto que se reclama: el pedimento fiscal y alegatos con todo lo demas que convino tener presente, y

Considerando: que de dichos procesos aparece bien justificado el robo con asalto verificado en los Cerritos pelones la tarde del día 31 de Julio último en las personas de Máximo y Andrea Lúebano, quienes reconocieron varias de las prendas que les fueron robadas y aprehendidas á Manuel Soto, y rindieron la justificacion de su propiedad y preexistencia.

Que por las declaraciones y reconocimientos unánimes de los robados y de los testigos Narciso Salas y Aniceto Ibarra, que tambien fueron asaltados aunque nada les robaron; se justificó la identidad de los espresados Manuel Soto y Nicolas Medina, como autores de dicho robo, con la circunstancia agravante de haber usado uno y otro con violencia de la persona de Andrea Lúebano, conduciéndola previamente al centro de monte, en donde le ataron las manos para consumar su delito.

Que por estos hechos, y de conformidad con el art. 89 de la ley de 2 de Mayo del año próximo pasado, prorogada su observancia por la de 10 de Abril último, estu-

vo en las facultades de la autoridad política de esta capital, el aprehender, juzgar y condenar á los expresados Medina y Soto, con arreglo á dichas leyes, sin violar las garantías individuales que impetran éstos; pues aunque se asegura en el alegato presentado en su favor y que ellos mismos ratificaron, que no se probó el estupro por los medios ordinarios, y que los testigos son tachables según las leyes 15 y 16 título 16, partida 3ª; como estas leyes se suscriben á los que únicamente puedan tener un interés directo comprobado por su dicho aiso-

testimonio uniforme de otros, en realidad pueden muy bien ser por no haber sido robados por la calidad muy marcada de antemano á Soto, fila de presos á Medina, se alido su testimonio, por que la presuncion de la ley cede prueba; y que no exigiéndose estupro esa circunstancia en la ayo citada, para imponer la e, basta según su art. 39 la el robo con asalto en despo- antificación de sus autores.

esto, el juez que suscribe, de on lo prevenido en los arts. e la Constitucion federal, 19 de 20 de Enero de 1869, t Justicia de la Union no am- e á Nicolas Medina y Manuel a sentencia de muerte á que jefatura política de esta ca- elito de robo con asalto que l 31 de de Julio último.

esta sentencia, publíquese icos, y elevése á la Suprema ía con el expediente, para los s. El ciudadano Juez de Dis- ado, así lo decretó y firmó: ro Arteaga.—Silverio Artea-

que certifico. Aguascalientes, re de 1874.—Silverio Artea-

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre 19 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes, por Nicolas Medina y Manuel Soto, contra los procedimientos del ciudadano jefe político de la capital del Estado que los ha juzgado y sentenciado á sufrir la pena de muerte, aplicándoles la ley de 10 de Abril del presente año, contra salteadores y palagiarios, con violacion de las garantías que consigna

la Constitucion federal en favor de todo acusado: visto el informe justificado de la autoridad, el parecer fiscal, el fallo del inferior con cuanto mas se tuvo presente y ver convino:

Por sus mismos legales fundamentos se confirma la sentencia del ciudadano Juez de Distrito de fecha 29 de Octubre del presente año, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Nicolas Medina y Manuel Soto, contra la sentencia pronunciada por el jefe político de Aguascalientes que los condenó á muerte por el delito de robo con asalto que perpetraron en 31 de Julio último.

Devuélvanse los autos al juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—M. Auza.—Juan J. de la Garza.—Ignacio Ramirez.—M. de Castañeda y Nájera.—Ignacio M. Altamirano.—S. Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Luis M. Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Diciembre 30 de 1874.—Lic. Enrique Landa, oficial mayor.

do, y no por e testigos, que servir como t ni ofendidos, da de haber c y extraído de sigue que es en estos casos al vigor de la en orden al e ley de 2 de D pena de muer justificación c blado, y la i

Por lo exp conformidad 101 y 102 y 29 de la l declarara: que para ni prote Soto, contra los condenó i pital, por el perpetraron

Notifíquese por los perió Corte de just efectos legal trito del Es doy fé.—Isi ga.

Es copia 3 de Novien ga, secreta